

49.ª SESION ORDINARIA — SEPTIEMBRE 20 DE 1883

Presidencia del señor MADERO

**Senadores presentes:** Alvear, Avellaneda, Baibien, Baltoré, Bayo, Cambaceres, Carrillo, Cortés, Dávila, del Valle, Febre, Igarzábal, Juárez Celman, Mendoza, Moyano, Nougués, Ortiz, Santillán y Zapata.

**Senadores ausentes, con aviso:** Barros, D'Amico, Gelabert, Gómez, Navarro, Oliva y Rodríguez.

**Senadores ausentes, con licencia:** Bárcena, Civit e Iriondo.

SUMARIO

- 1.—Asuntos entrados.
- 2.—Se considera y aprueba sobre tablas un proyecto del senador del Valle, disponiendo la construcción de un sepulcro para guardar los restos del general don Antonio Alvarez de Arenales.
- 3.—Indicación del señor senador Ortiz, para que se dé lectura de un telegrama de varios diputados de la Legislatura de Santiago del Estero.
- 4.—Consideración del dictamen de la Comisión de Negocios Constitucionales en el proyecto del Poder Ejecutivo, aceptando la cesión que hace la provincia de Corrientes del pueblo de Posadas para capital de Misiones. No termina.

—En Buenos Aires, a veinte de Septiembre de mil ochocientos ochenta y tres, reunidos en su sala de sesiones el señor presidente y los señores senadores arriba inscriptos, se abrió la sesión con asistencia de los señores senadores Bárcena, Civit e Iriondo, con licencia; y los señores senadores Barros, D'Amico, Gelabert, Gómez, Navarro, Oliva y Rodríguez, con aviso.

Leída y aprobada el acta de la anterior de 18 del corriente (48ª ordinaria), se dió cuenta de los asuntos entrados, a saber:

1

Poder Ejecutivo

Nota acusando recibo a la del Honorable Senado, por la que se comunicaba la sanción definitiva del proyecto de ley abriendo un crédito suplementario al inciso 2º, ítem 14, del presupuesto de Relaciones Exteriores. Al archivo.

Cámara de Diputados

Nota comunicando que esa Honorable Cámara ha tenido a bien insistir nuevamente en el proyecto de ley referente a construcción de diques en las provincias de La Rioja y Catamarca. Al archivo.

—Nota del señor presidente de la municipalidad de la Capital, acompañando el plano de mejoras y embellecimiento de la plaza Victoria. A la Comisión de Negocios Constitucionales.

Despachos de Comisión

La del Interior, en los mensajes del Poder Ejecutivo de Septiembre de 1875 y de Junio de 1882 y petición del señor don Lucas González en representación de la empresa del Ferrocarril de Concordia a Gualaguaychú, solicitando se declare subsistente la garantía acordada a dicha línea.

**Sr. del Valle.** — No necesito hacer moción; es la práctica reglamentaria. Hablaba en contra de la moción de que pasase al archivo.

**Sr. Presidente.** — Pasará a la Comisión de Negocios Constitucionales.

**Sr. del Valle.** — Tiene que votarse la moción del señor senador por Salta.

**Sr. Ortiz.** — La retiro.

Me parecía que no estaba en las atribuciones del Congreso entrar a juzgar una causa que está sometida a un juez nombrado con ese objeto, y que si el Senado pasara el asunto a Comisión, ésta tendría necesidad de investigar si las denuncias son o no ciertas. Entonces entraríamos a un juicio o cosa parecida, y no podríamos resolver sin oír o dar traslado al interventor, para que declare si son o no ciertos los hechos que se denuncian; pero desisto de mi indicación y que pase el asunto a Comisión.

**Sr. Presidente.** — Pasará a la Comisión de Negocios Constitucionales.

—Así queda resuelto.

#### 4

#### Orden del día

#### Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Negocios Constitucionales ha tomado en consideración el proyecto del Poder Ejecutivo aceptando la cesión que hace la provincia de Corrientes del pueblo de Posadas, para capital del territorio de Misiones; y, por las razones que os dará el miembro informante, os aconseja su sanción tal cual ha sido presentada.

Sala de comisiones, Buenos Aires, Septiembre 12 de 1883.

*Rafael Igarzábal. — Moisés Oliva.*

#### PROYECTO DE LEY

#### El Senado y Cámara de Diputados, etc.

**Artículo 1º.** — Aceptase la cesión que hace la provincia de Corrientes a la Nación, del pueblo de Posadas con el área de terreno cedida por dicha provincia por ley de 26 de Agosto de 1882, cuyos límites fijados en la referida ley son los siguientes: por el Este el territorio de Misiones, por el Norte el río Paraná hasta donde forma barra el arroyo Itaembé; por el Oeste este mismo arroyo hasta

sus nacientes desde donde se trazará una línea que pasando por el mojón N.º. de la propiedad de doña Luisa F. de Ahurralde, termine en el mojón colocado en las fuentes o nacientes del arroyo Chimiray, cuyo mojón es uno de los divisorios del territorio de Misiones, todo lo que será establecido y amojonado por peritos nombrados por el Poder Ejecutivo de la provincia de Corrientes.

**Art. 2º.** — Declárase capital del territorio nacional de Misiones el pueblo de Posadas.

**Art. 3º.** — Autorízase al Poder Ejecutivo para celebrar con el gobierno de Corrientes los arreglos necesarios a fin de dar cumplimiento a la presente ley.

**Art. 4º.** — Comuníquese, etc.

*Irigoyen.*

Buenos Aires, Junio 16 de 1883.

#### Al Honorable Congreso de la Nación.

El gobernador del territorio de Misiones se dirigió al Ministerio del Interior por nota de Junio de 1882 manifestando la conveniencia que habría en establecer la capital del territorio en el pueblo de Posadas con los límites reducidos que indicaba, exponiendo con este motivo diversas consideraciones tendientes a demostrar que su incorporación al territorio nacional favorecería eficazmente la buena administración de éste y su desarrollo, sin detrimento de los intereses de la provincia de Corrientes.

Considerando fundada esa indicación se dió conocimiento de ella al gobierno de Corrientes, y el Poder Ejecutivo tiene la satisfacción de manifestar al Honorable Congreso que esa digna provincia ha dado un nuevo testimonio de patriotismo y de obsecuencia a los intereses de la Nación, sancionando la ley de 22 de Agosto de 1882, promulgada el 26 del mismo, a virtud de la que cede a la Nación un área de terreno comprendida dentro de los límites que la misma ley indica.

La anexión al territorio de Misiones del área cedida es de evidente interés público así como la designación de Posadas para capital del mismo territorio. Este pueblo mejor situado que el de San Martín, permitirá a las autoridades nacionales la fácil comunicación, tan necesaria para que los poderes administradores hagan sentir eficazmente su influencia.

El Poder Ejecutivo remite al Honorable Congreso en copia legalizada los antecedentes de este asunto, y por las razones expuestas

espera la sanción del proyecto de ley que tiene el honor de someter a su consideración.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JULIO A. ROCA.

*Bernardo de Irigoyen.*

**Sr. Igarzábal.** — Señor presidente: como los señores senadores recordarán, inmediatamente de sancionada por el Congreso la ley que ha organizado el territorio de Misiones que limitaba con la provincia de Corrientes, el Poder Ejecutivo dictó un decreto estableciendo la capital de aquel territorio en la antigua Reducción de Corpus, con el nombre de San Martín, y envió allí las autoridades que estaba autorizado a nombrar por la ley.

Las autoridades se establecieron, señor, en aquel punto, y no ha sido necesario mucho tiempo para que se palpe de una manera evidente que fué un error, y un error grande, el separar a Posadas del territorio de Misiones, entorpeciendo así el desenvolvimiento de la población y la riqueza de esta región.

Desde luego, debo hacer notar que Reducción de Corpus ha resultado completamente inadecuada por su situación para ser capital del territorio de Misiones.

Está situada sobre la margen del Paraná, pero muy al Norte, e interceptada su comunicación con la región del Uruguay por la sierra de las Misiones, que cruza completamente todo ese territorio.

No tiene, señor presidente, camino alguno que la comunique con el interior; aquella región está rodeada de bosques inaccesibles, de arroyos que no tienen vado, en fin, es un punto completamente inadecuado para el asiento de las autoridades de aquel territorio.

Se ha visto prácticamente que, para hacer la administración de Misiones como correspondía, sería necesario construir caminos, hacer puentes, sacrificios enormes para el tesoro; debiéndose contar, además, con que para la realización de estas obras se necesitaría muchísimo tiempo.

Por otra parte, hay que advertir que el desenvolvimiento de la población y la riqueza del pueblo de Misiones, especialmente la explotación de la yerba mate, estaba completamente ligado al desenvolvimiento del pueblo de Posadas.

Separar a Misiones de Posadas sería decapitar a aquélla y quitarle a esta última la savia que la industria y la riqueza de aquel territorio le proporcionan para contribuir al desenvolvimiento de su población.

Haciendo presente estas circunstancias, el señor gobernador de Misiones dirigió el año pasado una nota al señor ministro del interior. El señor ministro, comprendiendo que no estaba en manos del gobierno nacional el poner remedio a este mal, puesto que el pueblo de Posadas hacía parte del territorio de la provincia de Corrientes, remitió la nota al gobierno de aquella provincia, y después de algún tiempo ha obtenido la contestación más satisfactoria. El gobierno de Corrientes remitió la ley de la Legislatura, por la cual cedía el pueblo de Posadas para capital del territorio de Misiones. La cesión es con esa condición.

La mayoría de la Comisión de Negocios Constitucionales, fundada en las razones que he expuesto anteriormente, y teniendo presente, por otra parte, que esta cesión es hecha de conformidad a las prescripciones de la Constitución nacional, encuentra que el Congreso debe aceptarla y contribuir por este medio al desenvolvimiento rápido de la riqueza y población del territorio de Misiones, a fin de que cuanto antes esta región se incorpore a la Nación con el rango de provincia de la República.

**Sr. del Valle.** — Pido la palabra.

Con mucho pesar no he podido subscribir el dictamen de la mayoría de la Comisión de Negocios Constitucionales, respecto de la cesión del pueblo de Posadas para capital del territorio de Misiones, que es el motivo del proyecto en discusión.

Pero, no obstante los deseos que tenía de no presentarme en disidencia con mis honorables colegas, he estudiado el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo y he encontrado objeciones tan serias, de naturaleza tan grave, que no he podido prescindir de firmar en disidencia, para traer al seno de la Cámara las consideraciones que, en mi concepto, obstan a la aprobación de este proyecto.

El caso ha sido planteado con exactitud, me parece, por el señor miembro informante de la mayoría de la Comisión.

El gobernador de Misiones sintió la necesidad, o creyó conveniente que el pueblo de Posadas fuera adscripto a su territorio, para servirle de capital. Solicitó del Poder Ejecutivo que diera los pasos conducentes a este objeto. El Poder Ejecutivo solicitó de la provincia de Corrientes la cesión, y la provincia de Corrientes dictó la ley cediendo dicho pueblo con aquel objeto.

Respecto de la naturaleza de este procedimiento y la forma en que ha sido realizado, llegará el momento en que me explicaré; por

ahora me basta plantear el caso con toda su sencillez tal cual ha quedado explicado, por el miembro informante de la mayoría.

Cuando yo empecé a estudiar este proyecto, señor presidente, me asaltó esta duda: ¿Esta cesión, es una cesión constitucional? ¿Está en el orden de nuestras instituciones que una parte de un territorio de una provincia, poblada, y que se encuentra en el ejercicio de sus derechos políticos, sea adscripto a un territorio nacional que no goza de los derechos políticos, que está organizado, casi puede decirse, militarmente, porque ni siquiera tiene las garantías del gobierno civil, que una ley pudiera darle a todos los territorios nacionales?

Estudié cuidadosamente la Constitución y todos los artículos que en ella se contienen referente a cesión de territorios, etcétera, y encontré, señor presidente, que la Constitución argentina no tiene sino tres artículos, o dos artículos y dos incisos de otro, que pueden tener relación con esta cuestión de «territorio nacional, cesión de territorio, gobierno directo de la Nación sobre territorios, etcétera.»

El primero es el artículo 3º de la Constitución, que se refiere a la capital de la República y que prescribe lo siguiente:

«Las autoridades que ejercen el gobierno Federal residen en la ciudad que se declare capital de la República por una ley especial del Congreso, previa cesión hecha por una o más legislaturas provinciales, del territorio que haya de federalizarse.»

Este artículo, como se ve, no tiene nada que ver con la cesión de una parte de una provincia para adscribirla a un territorio federal; se refiere única y exclusivamente a la cesión de territorio para formar la capital de la República.

Después del artículo 3º, viene el artículo 13 de la misma Constitución, que dice esto:

«Podrán admitirse nuevas provincias en la Nación; pero no podrá erigirse una provincia en el territorio de otra u otras, ni de varias formar una sola, sin el consentimiento de la legislatura de las provincias interesadas y del Congreso.»

Como se ve, este es un artículo limitativo de facultades: admite la posibilidad de que se formen nuevas provincias en el territorio argentino; pero declara que no podrán formarse nuevas provincias en el territorio argentino ni refundirse dos en una, sin que se reúnan estos dos elementos: la voluntad del Congreso y la voluntad de la Legislatura del Estado, según sea el caso.

Sobre este artículo quizás tendré que detenerme algo más, porque me ha parecido que en la discusión que ha tenido lugar en el seno de la Comisión, sirvió hasta cierto punto de base a la opinión que consideraba constitucional la cesión.

Es sabido, señor presidente, cuál es la historia de este artículo, que ha sido textualmente copiado de un artículo de la Constitución de Estados Unidos.

Al organizarse la Unión Americana, los Estados débiles temían que los fuertes quisieran adscribirse a alguno de ellos, haciéndolos desaparecer como entidades políticas en la Unión; y temían también que los Estados poderosos, los Estados muy extensos, como el de Virginia, por ejemplo, se fraccionaran para aumentar su fuerza política enviando dos senadores más al Congreso por cada nuevo Estado que se formara en el territorio, y sin embargo, siguiendo subordinado al Estado grande por los antiguos vínculos que existieran mientras formaron uno.

Entonces, en precisión de esos dos peligros, y como una transacción, para que ni uno ni otro caso pudiera producirse con otro objeto que no respondiera al poder de la Nación, se puso este artículo: que no podría formarse un nuevo Estado ni de dos formarse uno, sino con la voluntad de la Legislatura y con la voluntad del Congreso, lo que garantizaba los intereses de una y otra parte hasta donde las instituciones pueden garantizar hechos de esta naturaleza.

Nada hay en este artículo tampoco que pueda amparar o justificar la reunión de Posadas al territorio nacional.

Vienen después los otros dos incisos a que me he referido, los incisos 14 y 27 del artículo 67 de la Constitución de la sección que trata de las facultades del Congreso.

El inciso 14 prescribe que corresponde al Congreso: Arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación, fijar los de las provincias, crear otras nuevas, y determinar por una legislación especial la organización, administración y gobierno que deben tener los territorios nacionales, que quedan fuera de los límites que se asignen a las provincias.

El primer miembro de este artículo es: «Arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación». Nada tiene que hacer a la cuestión... «fijar los de las provincias, crear otras nuevas». Fijar los límites de las provincias ¿qué significa? ¿Es esta una facultad arbitraria dejada al Congreso para decir, los límites de tal o cual provincia deben trasladarse aquí o allí, sin relación a la población, a los

títulos, a los hechos producidos! No, señor presidente. Porque, si tal fuera la facultad acordada al Congreso, estaría en contradicción con el artículo que ya antes he leído, que prohíbe al Congreso desmembrar los territorios de las provincias. Si fuera esa la interpretación del uno, sería negatoria la disposición del otro.

Pero, sea de esto lo que fuera, y sea cual fuere el alcance que se atribuya al artículo, es evidente que en el caso que nos ocupa no se trata de ejercitar la facultad de aquel inciso, porque los límites de la provincia de Corrientes, por la parte que linda con Posadas, han sido ya tratados por el Congreso, y esta facultad de fijación de los límites no es una facultad que el Congreso ha de traer todos los días, removiendo los límites que están fijados a una u otra provincia.

Queda el último inciso, el inciso 27: «Corresponde al Congreso: ejercer una legislación exclusiva en todo el territorio de la Capital de la Nación, y sobre los demás lugares adquiridos por compra o cesión en cualquiera de las provincias para establecer fortalezas, arsenales, almacenes u otros establecimientos de utilidad nacional.»

Este artículo parece que fuera el más favorable a la cesión de que se trata; pero si los señores senadores se dan cuenta bien de su texto y buscan los antecedentes de él, encontrarán que es igualmente inaplicable para el uso de las facultades que se trata de ejercer.

El artículo presupone que haya compra o cesión de territorios en las provincias. Pero compra y cesión; para qué objeto? Exclusivamente para establecer fortalezas, arsenales, almacenes u otros establecimientos de utilidad nacional.

Debo recordar a la Cámara que este artículo también está copiado textualmente del artículo correlativo de la Constitución americana, con esta diferencia: que la Constitución Americana dice «u otros «edificios», y la nuestra «u otros «establecimientos». Es una palabra mal traducida; pero esto no cambia absolutamente la naturaleza de esta disposición.

Todos los comentadores de la Constitución americana, sin una sola excepción, desde *El Federalista*, hasta el último comentador de nuestros días, incluyendo a Kaen, Story, Curtis, y todas las altas autoridades que el gobierno americano tiene para la interpretación de sus instituciones, han reconocido de una manera explícita que las cesiones, como las que en este caso se trata, son aquellas expresamente dichas, como ser fortalezas, arsenales, almacenes, etcétera, y dan como fundamento de estas ad-

quisiciones la razón siguiente, que la localiza y la limita. Ellos dicen: si se trata de una fortaleza de la cual puede depender la seguridad nacional, no es posible dejar su jurisdicción en manos del Estado; si se trata de un almacén, de un astillero, de un establecimiento en el cual la Nación invierta sus propios dineros y haga una obra pública de importancia para el país, requerida por otra parte para el ejercicio de las facultades soberanas del gobierno de la Nación, no es posible tampoco que esta obra dada su naturaleza y dado el origen de los fondos que se han invertido en su construcción, venga a quedar bajo la jurisdicción del Estado.

En ningún caso suponen ni admiten como posible que puede hacerse esta cesión de territorio, al solo objeto de aumentar el que ya la Nación tenga como territorio federal.

La cuestión de los territorios nacionales, señor presidente, tiene una tradición que no debe olvidar la Cámara. Debe recordar que nuestras instituciones están calcadas sobre las instituciones americanas; que la mayor parte de los artículos de nuestra Constitución están literalmente copiados de aquella Constitución, y que ellos no han venido con la doctrina, cuando no se apartan de las tradiciones en los hechos; y que la regla más segura para no equivocarnos, cuando nos encontramos en caso de duda en asuntos de esta naturaleza, es seguir aquella doctrina tan clara y tan ilustrada.

Todos los señores senadores recuerdan cuál fué la cuestión de los territorios en Estados Unidos.

En los momentos en que el movimiento revolucionario de América sufría gravísimos contrastes, se trataba de dar al Congreso continental, que había declarado la independencia pero que no tenía facultades expresas ni constitucionales, se trataba, digo, de darle fuerza y crear un gobierno que, en más o en menos, representara la autoridad de la Nación, y pudiera decirse la encarnación de un gobierno nacional.

No se intentaba todavía dar la Constitución definitiva que gobierna a Estados Unidos hasta este momento, sino que se proyectaban los artículos de la antigua Confederación.

Y bien, señor presidente, aquellos artículos de la Confederación que daban la primera forma nacional al movimiento continental revolucionario de Estados Unidos, fueron sancionados, si mi recuerdo no me es infiel, en 1777, y durante tres años y medio estuvieron sin con-

vertirse en ley de la Nación, porque sometidos a la aprobación de las trece colonias, hubo tres o cuatro que resistieron su aprobación, precisamente por la cuestión de los territorios.

Existían entonces las grandes áreas de tierra de Virginia y de algunos otros estados que se extendían hasta el Oeste, y como las cartas ereccionales de esos Estados no les habían fijado límites precisos, pretendían extenderse hasta el mar del Sur.

Los artículos de la Confederación nada decían respecto de la cuestión de límites con relación a los territorios, y entonces los pequeños Estados del Norte, reclamaban para la Unión esos territorios despoblados y desiertos que iban a ser conquistados y poblados con el esfuerzo de toda la Unión: no puede ser, se decía, el patrimonio exclusivo de ellos, de los que no pueden invocar sino un título muy discutible, porque cuando menos ha sido otorgado sin tener siquiera conocimiento geográfico de lo que se les concedía.

Fué necesario que la situación acreciera en sus inconvenientes y en sus peligros, y fué necesario todo el sentimiento patriótico y levantado de los Estados que componían entonces la Unión Americana, para que aquel principio de unión nacional no se dislocara, y el gran movimiento de la Independencia americana no llegara a fracasar.

Nueva York dió el ejemplo: queriendo obviar los inconvenientes que se presentaban para la aceptación de los artículos de la Confederación, renunció a todos los territorios despoblados que pudieran pertenecerle, conservando sólo aquellos que habían estado bajo su dominio y que debían más adelante formar el territorio del Estado.

Entonces, uno de los estados que se oponía a la organización de la Nación, alegando que ésta no podía tener lugar sin la renuncia previa de los territorios por parte de aquellos Estados, inspirado en su sentimiento patriótico, dijo: desisto también de mi oposición, porque tengo la confianza de que otros estados de la Unión que pretenden grandes territorios han de seguir el ejemplo de Nueva York y han de renunciarlos también en beneficio de la Nación.

El ejemplo fué seguido y todos los Estados se incorporaron a la Unión Americana; los artículos se sancionaron y llegaron a ser la primera carta constitucional de los Estados Unidos.

Fué entonces, señor presidente, cuando sucesivamente, uno por uno todos los estados que tenían territorios nacionales hacia el Oeste,

fueron cediéndolos a la Unión, y creándose de esta manera lo que se ha llamado en seguida territorios nacionales, que han venido a quedar bajo el gobierno directo de la Nación.

En ningún caso, señor presidente, no recuerdo que siquiera se haya hablado de que Estados Unidos tenían ni podían tener derecho a territorios poblados por los Estados: se trataba única y exclusivamente de los territorios desiertos. Estos fueron los territorios que se reconocieron a la Nación y que, como digo, entraron bajo su dominio directo.

¿Qué tienen que ver los artículos de la Constitución argentina, a que he hecho referencia, con relación a estos mismos artículos de la Unión Americana, ¿qué tiene que ver, digo, si se consideran desde el punto de vista de este proyecto que discutimos?

¿Hay alguno de estos artículos que explicita o implícitamente autorice la cesión de que se trata? ¿Se trata acaso de la cesión de un territorio para construir edificios, astilleros, arsenales, etcétera?

No es para objetos de los que se llaman nacionales que se pide la cesión, no: los territorios no representan sino una situación intermedia entre el desierto y la vida del Estado: van buscando su desenvolvimiento propio para convertirse en Estados, y no son de los que por su naturaleza se llaman intereses esencialmente nacionales los intereses que se refieren a estos territorios.

Pero he hecho una pequeña referencia que necesito explayar respecto a la condición en que se encuentran los habitantes de la provincia de Corrientes comprendidos en la cesión.

Hay en el territorio que se trata de ceder, 4 ó 5.000 habitantes.

**Sr. Baibiene.** — Siete mil ochocientos noventa y uno por el censo del año 1859.

**Sr. del Valle.** — Muy bien.

Quiere decir que en el año de 1883 representará una población de 18.000 almas; sino de 18, de 14 ó 13, es decir, una cuota electoral bastante para nombrar un diputado al Congreso de la Nación.

Esta agrupación social, es al mismo tiempo una agrupación política, a la cual nuestra Constitución le ha acordado derechos inalienables; y por el proyecto que en este momento se discute, señor presidente, se trata de convertir esta agrupación social y política, que se encuentra en toda la plenitud de los derechos que la Constitución le reconoce, en un estado de minoridad política, gobernado por el tutelaje del Poder Ejecutivo o de un gober-

nante nombrado por el Poder Ejecutivo, y sujeto solamente a reglas administrativas.

¿Es constitucional este procedimiento?

Yo sé que la Constitución dispone que los territorios se conviertan en Estados; que los que no tienen derechos políticos lleguen a adquirirlos; que cuando se encuentren en el estado de minoridad política, por decirlo así, puedan llegar a la mayoría y gozar de toda la plenitud de sus derechos constitucionales. Pero lo que no encuentro en la Constitución, en ninguno de sus artículos, ni en la índole de nuestras instituciones, es que pueda adoptarse el procedimiento inverso, es decir: que las agrupaciones políticas que tienen derechos políticos, puedan llegar a ser privadas de ellos, por un acto del Congreso o de la Legislatura de la respectiva provincia.

Más, señor presidente: la interpretación de la Constitución argentina es y tiene que ser más exigente que la interpretación de la Constitución americana.

Por la Constitución americana, la capital, por ejemplo, no tiene representación política; la capital de la Unión, como todos los territorios federales, no tiene más que delegados en la Cámara de Diputados; es decir: delegados que hablan pero que no votan, que no forman parte de la Cámara, que no hacen quórum, que son meros miembros informativos de las necesidades del territorio que representan, para que el Parlamento pueda dictar las medidas que esas necesidades requieran.

La Constitución argentina, cuando ha concedido la posibilidad de que un territorio con población, con una sociedad organizada y política, llegara a convertirse en capital de la Nación, se ha colocado en distintas condiciones.

Por eso es que la capital de la República Argentina, a diferencia de la americana, tiene representación en el Congreso: un número de diputados proporcional a la población, se sienta en la Cámara de Diputados, y dos senadores están representándola en el seno de este Cuerpo.

Entonces, señor presidente, si en el único caso en que la Constitución ha admitido la posibilidad de que haya cesión de territorios con población, ha establecido también que esta población ha de continuar en el ejercicio de sus derechos políticos, algo más, ha de salir beneficiada en su representación, porque la ciudad de Buenos Aires, que no tenía la representación de estos dos senadores antes de ser capital de la Nación, la tiene hoy cómo puede, decirse que está dentro de la Constitución esta transformación en sentido inverso, que importa despo-

jar a los habitantes de Posadas de toda clase de derechos y de representación política?

Estas consideraciones constitucionales, señor presidente, me hacían pensar que el proyecto no estaba amparado por la Constitución nacional.

Pero hay algo más.

Digo que el acto que se trata de sancionar, que la cesión hecha por la Legislatura de Corrientes, que se quiere poner al amparo de una ley del Congreso argentino, es una cesión inconstitucional, del punto de vista de las instituciones de Corrientes.

La Constitución de Corrientes establece en su artículo 2º, cuáles son los límites de aquella provincia, y después de fijadas las líneas de su territorio, sólo deja a salvo la modificación que pueda introducir el Congreso al fijar los límites definitivos de las provincias, en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución nacional.

Pero como no se trata aquí de aquel caso, es necesario buscar si en la Constitución de la provincia de Corrientes existe algún artículo que autorice al Poder Legislativo para hacer la cesión de que se trata.

Registrando cuidadosamente la Constitución de la provincia de Corrientes, he encontrado que el Poder Legislativo no tiene facultad para hacer lo que ha hecho; no tiene derecho para mutilar el territorio de la provincia; no tiene facultad para privar a esta parte de su territorio de los derechos políticos.

La Legislatura de Corrientes no ha recibido ese mandato: su mandato está limitado, encajonado, dentro de los objetos constitucionales, y no puede decirse en manera alguna, que llegue a tener las facultades constituyentes de modificar los artículos de la Constitución, como los modifica desde que cambia los límites que la Constitución asigna a la provincia.

Digo, ahora: si la Legislatura ha realizado un acto inconstitucional inducida por el Poder Ejecutivo de la Nación, ¿debe el Congreso argentino, el gobierno de la Nación, que según un artículo de la Constitución, garantiza a las provincias sus instituciones, debe, digo, amparar aquella violación clara y flagrante de las instituciones de Corrientes?

Absolutamente, no, señor presidente: me parece que es en esta parte donde es más visible, más chocante la inconstitucionalidad del proyecto, considerado del punto de vista de las instituciones provinciales.

Bastaría esta consideración, para que por mi parte hubiera procedido como procedo, es

decir, para que hubiera negado mi concurso al proyecto en discusión.

Pero fuera de esto, señor presidente, hay razones de otro orden que me llevarían en el mismo sentido, aun cuando no existieran las razones constitucionales que he aducido: las conveniencias nacionales.

Este proyecto no viene amparado sino por la conveniencia de mejor administración del territorio de Misiones, y esta conveniencia se reduce a que la actual capital de Misiones no tiene medios fáciles de comunicación con los pueblos que se encuentran hacia el lado del Uruguay, a consecuencia de la serranía que corta casi todo el territorio de Misiones. Y como circunstancia secundaria, se han hecho valer también las conveniencias de Posadas, porque habiendo sido centro del comercio yerbatero de aquellos territorios, se dice que si no quedara formando dentro del territorio de Misiones, sus intereses serían perjudicados.

Doy por sentado, señor presidente, que exista dificultad de comunicación. No es a mí a quien toca estudiar ese punto, porque no soy quien mejor conoce las condiciones geográficas y topográficas de aquella zona.

Pero, suponiendo que hubiera dificultades, ¿son éstas de tal naturaleza que no puedan superarse con los esfuerzos y los dineros de la Nación?

El gobernador de Misiones en la nota que dirigió al Poder Ejecutivo solicitando sus esfuerzos en el sentido de la cesión, no dice semejante cosa; por el contrario, reconoce que son practicable los caminos, aun cuando dice que serán costosos, y quizá un poco morosa su construcción.

Pero la inconveniencia de hacer estos trabajos, ¿es de tal naturaleza que justifique la desmembración del territorio de Corrientes?

Mi opinión es absolutamente negativa.

Si algo, señor presidente, se siente en nuestro organismo nacional, es la debilidad de los estados federales.

Si a algo debemos aspirar, es a que los estados federales se fortalezcan, a que su población acrezca, a que se vigoricen; en una palabra, propender a su desenvolvimiento, y concurrir en esa forma a la mejor ejecución de todas nuestras instituciones.

La provincia de Corrientes es una de las que tienen mayor población; pero no se encuentra en las condiciones que debemos desear para que sea un verdadero estado federal, y así vemos sus selvas incultas, sus campos sin labrar, sus ríos sin navegación.

Sobre este punto no hay cuestión, no hay nada que revele la existencia de una población bastante, porque si hubiera población bastante, habría riqueza, habría trabajo, habría progreso, habría adelanto, estaría a la altura de nuestra época, a la altura en que se encuentran algunos otros estados de la Nación.

Entonces: cuando un Estado o una provincia se encuentra en tales condiciones, ¿es conveniente debilitarla, arrebatándole una zona de su territorio y una gran parte de su población, casi la representación de un diputado? ¿Esas inconveniencias no son de tal naturaleza como para prevalecer contra la mínima, la ínfima, la miserable inconveniencia de la construcción de un camino?

No hay más que plantear la cuestión ante espíritus rectos y serenos para que ella sea resuelta.

No pueden oponerse las dificultades de la construcción de un camino, a los inconvenientes que tiene para la mejor marcha de nuestro sistema de gobierno, la desmembración del territorio de una provincia, que significa la desmembración de sus fuerzas sociales y políticas, y, más que eso, el precedente que se establece con la cesión.

Otra consideración más, señor presidente, también de conveniencia.

Cuando se trataba de declarar territorio federal el territorio de Misiones, incorporado después de muchos años a la provincia de Corrientes, una de las consideraciones que se hacían valer en el seno del Congreso, pública y privadamente, era la conveniencia de llevar todas las fuerzas de la Nación para poblar este territorio tan rico, y, más que tan rico, tan codiciado.

No podemos, se decía, dejar incultas y despobladas, tierras que vecinos poderosos anhelan. Es necesario que los derechos de la Nación se consagren con la posesión; es necesario que la bandera, que la autoridad de la República Argentina, vaya a justificar y a hacer prevalecer el derecho argentino sobre el territorio de Misiones.

Y bien, señor presidente: ¿qué es lo que con este proyecto se hace? ¿Hacia qué lado tenemos nuestras cuestiones? ¿De qué lado nos disputan el territorio? ¿Del lado del territorio de Posadas? No, señor presidente.

LLamo la atención del Senado sobre ese hecho que es gravísimo: la cesión del territorio de Posadas para capital de aquel territorio nacional, implica la estagnación en población y en progreso por años y años de todas las costas del Uruguay, precisamente por el lado en que



los derechos argentinos son discutidos y disputados.

La conveniencia de no hacer un camino, de no gastar 2 ó 3.000 pesos — aunque fueran 2 ó 3.000.000 —, ¿puede siquiera equipararse a las conveniencias nacionales que habría en llevar la capital del territorio de Misiones a las costas del Uruguay?

Este hecho, señores, es tan grave, y en las circunstancias actuales lo es tanto más, que yo me sorprendería de que teniendo presente, el Senado y el gobierno mismo, sostuvieran este proyecto.

Digo esto, señor presidente, porque es notorio que en estos momentos, la provincia de Entre Ríos que tenía también su capital sobre el Uruguay, acaba de trasladarla sobre el Paraná. No me corresponde juzgar los actos que aquella provincia ejecuta, ejercitando facultades propias, no me corresponde juzgarla sino como argentino, como hombre público, en esta o en cualquiera otra parte; y yo digo que si desde algún punto de vista de la administración interna, del desenvolvimiento de la provincia de Entre Ríos, aquella traslación tiene ventajas, no las tiene desde el punto de vista de las conveniencias nacionales.

Es sobre el Uruguay que nosotros debemos echar la población argentina, es sobre el Uruguay que debemos plantear todas las capitales de aquellos territorios, es el Uruguay nuestra línea de defensa y es allí donde debemos concentrar todas nuestras fuerzas; y sin embargo, se saca la capital de Entre Ríos de donde está para llevarla hasta Paraná, y ahora se quiere establecer la capital de Misiones sobre el mismo Paraná, en lugar de colocarla sobre el Uruguay, burlando así hasta las esperanzas de los que sostuvieron la federalización de Misiones, con el espíritu patriótico de llevar todas las fuerzas nacionales a defender aquellos territorios contra las ambiciones de poderosos vecinos. ¡Póngase en frente de esta conveniencia nacional, la conveniencia de hacer un camino por las serranías que cortan el territorio de Misiones!

Algo más puedo decir, y es otra fase desde la cual voy a considerar este asunto, fase que también debe pesar en el ánimo del Senado, y es la manera como esta cesión se ha verificado y la tradición de hechos a que viene ligado este proyecto de federalización.

Nadie ignora cómo se ha constituido la situación de Corrientes. No es para juzgar de nuevo que voy a traer a tela de juicio los procedimientos que he condenado en esta misma Cámara, de parte del Poder Ejecutivo, ni es para

hacer reproches, reprobaciones estériles contra la marcha política del Poder Ejecutivo, que voy a recordar aquellos hechos; es para ponerlos de manifiesto ante todos los señores senadores que están representando aquí la soberanía de los Estados, y que no pueden prescindir del carácter eminentemente político de su representación, cuando se discuten asuntos de esta naturaleza.

Es público, señor presidente, es histórico ya, que la situación de Corrientes se ha constituido sobre la base de una revolución en la que, con razón o sin ella, se le atribuyó parte principal al gobernador de Misiones y, lo que es mucho más grave, señor presidente, lo que es sin ejemplo en nuestra historia, tan llena de errores, tan llena de debilidades, tan llena de vergüenza, lo que es sin ejemplo, digo, es que esa revolución haya tenido la aprobación personal del presidente de la República, en el teatro mismo de la revolución.

Y bien, señor presidente; es la situación constituida por estos medios, la que viene a hacer cesión del territorio de Posadas, y la hace, ¿cómo? A solicitud de aquel mismo gobernador de Misiones que se llamaba fautor de la situación a favor de la insinuación, casi diríamos de la exigencia — cualquiera sea la forma en que esa exigencia se haya revestido — del Poder Ejecutivo de la Nación, que esta cesión se hace. Y se hace, ¿cómo? ¿Se hace en debate libre, a la luz del día? No; se hace en debate secreto, cerrando las puertas de la Legislatura de Corrientes para que la opinión pública no venga a hacerse sentir en su seno y a protestar contra un acto que no quiero siquiera calificar.

¿Se quiere una prueba palpable, evidente de toda la impopularidad, de toda la irregularidad de todos estos procedimientos? La tiene el Senado dentro de su propio seno. Hay dos senadores de Corrientes en nuestro recinto, dos senadores de Corrientes que representan políticamente, la soberanía de aquella provincia y que desde otra fase política representan los dos partidos en que aquella provincia está dividida. No hay entre estos senadores más punto de contacto que el ser ambos argentinos y el haber nacido en el territorio de Corrientes; rara vez encontraránse juntos votando en el seno de esta Cámara, y sin embargo, señor presidente, uno y otro, consultados por los miembros de la Comisión, uno y otro han protestado contra esta cesión, calificándola, lo mismo el opositor a la situación que el defensor ardiente de ella, como una iniquidad que se realizaba en la provincia de Corrientes a favor de la

influencia irresistible del gobierno de la Nación.

Estos hechos significan mucho, señor presidente; significan mucho para el Senado argentino que representa la soberanía, como lo he dicho, de todos y cada uno de los Estados federales.

¿En qué camino vamos?

El poder de la Nación como poder constitucional, no tiene contrapeso ni debe tenerlo; pero es que tras del poder, de la autoridad de la Nación, que todos acatamos y respetamos, que todos hemos contribuido a crear, y no yo menos que otros, tras de esta autoridad se levanta la autoridad personal, no de la Nación sino de las personas que componen el gobierno, y ejercitando influencias que no son las de la Constitución y con objetos que no son constitucionales, se producen actos que no responden a ningún interés nacional, que se apartan de las reglas de nuestras instituciones y que crean precedentes que pueden ser funestos para toda la República.

Ahí tenemos ya dos o tres provincias modeladas a la voluntad presidencial. La provincia de Corrientes, ya se sabe, tiene una historia conocida.

Aquí está un señor senador por Entre Ríos que nos puede decir lo que ha pasado en la suya. Todos sabemos la historia. Un candidato que iba a tener unanimidad de votos en la provincia de Entre Ríos para ser electo gobernador, con ocho días de intervalo, no tuvo uno solo.

¿Es que ese candidato había perdido la opinión de su provincia? ¿Es que el candidato adverso había ganado la opinión de que antes carecía?

Yo no juzgo los méritos de uno y otro candidato; respeto a mi honorable colega el señor senador por Entre Ríos, que encarnaba una de aquellas candidaturas: me ligan vínculos de amistad personal con el candidato adverso que fué al poder; pero enalesquiera sean mis sentimientos personales respecto de estos dos señores, yo digo: hubo algo que no estaba en la opinión de Entre Ríos ni en el juego de las instituciones, que produjo aquel cambio visible y palpable, y el hecho fué denunciado por el señor senador por Entre Ríos. Se trataba de un voto en el seno de este cuerpo y del más grande atentado que el representante del Poder Ejecutivo podía cometer respecto de todo el Parlamento: se trataba de responsabilizar a un senador por el voto que había dado en el seno de esta Cámara, ejercitando sus facultades constitucionales. En la persona de un senador fueron violadas las garantías parla-

mentarias de todos los miembros del Senado; fué desacatado el Senado y el Congreso argentino.

El senador por Entre Ríos dejó de ser candidato porque el presidente de la República creyó que era conveniente modificar aquella situación, y la situación se modificó.

Vino la situación de Santiago del Estero en aquellos días, y todos sabemos que aquella situación tan combatida, y combatida con tanta razón, resistió sin embargo a la mayoría del Senado, y que un proyecto de intervención fué paralizado en la Cámara de Diputados por acción bien conocida, de la cual no puedo hablar porque se trata de un cuerpo político cuyos actos no están sometidos a mi juicio.

Y bien, señor presidente; ¿qué sucedió? En seis meses se cambió la situación política de aquella provincia. Un cambio de afecciones, un cambio de sentimientos del jefe del Estado echó por tierra la situación de una provincia y el proyecto que no tenía la manera de hacer su vía, de convertirse en ley, se convirtió con muchos mayores efectos que entonces se produjeron, y un senador que viene a esta Cámara es rechazado, y la intervención se llevó, y esa intervención desconoció a aquel gobernador y ese gobernador acaba de venir a reclamar amparo del Congreso contra los actos del Poder Ejecutivo.

Dírase lo que se quiera: salvaránse las formas de la manera más hábil posible — nunca faltan abogados para estas causas: es la causa de los poderosos, es la causa de los que mandan—; pero queda una cosa en la conciencia pública, que nadie ni nada podrá destruir, y esto que queda en la conciencia pública es que la situación de Santiago del Estero se modificó porque se modificó la opinión del presidente de la República; y es que gobiernos caen y gobiernos se levantan, y Legislaturas se crean y Legislaturas se reconstruyen, según sea la voluntad del presidente de la República, y las instituciones se amoldan a estas dolorosas exigencias en que vamos viendo que se pierden hasta los rastros del gobierno libre.

**Sr. Ortiz.** — Está fatigando a los pueblos.

**Sr. del Valle.** — El señor senador sabe bien a quién fatiguo, sabe bien que los pueblos no ejercitan sus derechos sino en la medida de lo posible.

**Sr. Ortiz.** — Porque no quieren.

**Sr. del Valle.** — Es la disculpa con que siempre se han justificado los despotismos. Se ha dicho los pueblos tienen los gobiernos que merecen, y por no levantar los déspotas a la al-

tura de los pueblos, han rebajado los pueblos al nivel de sus déspotas.

No es esa la verdad, no.

Los pueblos pueden; pero los pueblos pueden, ¿cuándo? ¿Pueden cada día? ¿Pueden lanzarse a cada momento en estos movimientos tumultuosos de la revuelta, para reconquistar sus derechos? ¿Pueden, siquiera, cuando se lanzan en ella, tener la cooperación de los hombres que aman la felicidad del país?

No, no pueden lanzarse todos los días a la revuelta a reivindicar sus derechos por las armas, no pueden siquiera tener la cooperación de los hombres que aman su país, aun cuando éstos conozcan que es justa la causa que defienden, porque hay un interés primordial, el interés de la paz nacional; y porque los mismos que ven oprimidas las libertades y conculcada la Constitución; porque los mismos que quisieran ver el reinado de la paz y de la libertad, retroceden ante los peligros de las convulsiones de una guerra civil, porque tras de esto temen ver surgir este poder opresor con más vigor y más estabilidad que si se dejara al mero transecurso del tiempo modificar el estado de su situación.

Así se explica cómo es que los pueblos no siempre pueden hacer lo que desean.

**Sr. Ortiz.** — Hoy no van las bayonetas nacionales a derrocar gobernadores, como en otra época.

**Sr. del Valle.** — Yo no defiendo otra época con relación a ésta, señor senador; estoy hablando de esta época porque la ocasión se presenta con relación a un proyecto cuya sanción miro con interés, y como lo he dicho, no con el propósito de hacer cargos retrospectivos a la administración.

El señor senador podrá creer, quiero que crea, deseo que crea que en realidad lo que vemos en la República, desde Buenos Aires hasta Jujuy, es la verdadera manifestación de la opinión pública de los pueblos...

**Sr. Baibiene.** — Es el fariseísmo más escandaloso cubriendo las instituciones republicanas.

**Sr. Juárez Celman.** — Yo protesto por lo que hace a la situación de Córdoba.

**Sr. del Valle.** — No me he referido a una situación dada.

**Sr. Juárez Celman.** — No me refería al señor senador, contestaba al señor senador por Corrientes.

**Sr. Presidente.** — Pediría a los señores senadores que no se apartasen de la discusión.

**Sr. del Valle.** — Estoy hablando en general de la situación de la República y en este

caso he hablado de las localidades en las cuales se ha manifestado de una manera más directa la acción del Ejecutivo.

**Sr. Juárez Celman.** — ¿Pero qué influencia? La influencia moral, la influencia que todos pueden ejercitar.

**Sr. del Valle.** — Permítame el señor senador: el presidente de la República no debe tener influencia sino para cumplir la Constitución y las leyes de la República para elegir gobernadores, influencia del presidente de la República para cambiar candidatos, influencia del presidente de la República para remover legislaturas? Pero esta influencia no es influencia que esté en la Constitución y en las leyes!

**Sr. Presidente.** — Los señores senadores se apartan de la discusión. No puedo permitir que la discusión continúe en este terreno.

**Sr. Juárez Celman.** — Pero esa intervención ha sido decretada contra la voluntad del Poder Ejecutivo.

**Sr. del Valle.** — Parece que ha sido así por una parte, y por otra no.

En una palabra, y para refundir, llamo la atención del Senado sobre esto.

Todos y cada uno de los Estados que componen la Nación Argentina, representados políticamente en el seno de este cuerpo, están interesados en que sus instituciones sean respetadas en verdad y en conciencia, no sólo en palabra, sino en los hechos; están interesados en que cese esta desgraciada intromisión del Poder Ejecutivo en los asuntos internos de cada provincia.

Entonces, apelando a este sentimiento que en este caso se manifiesta con relación al territorio del pueblo de Posadas cedido por la provincia de Corrientes por los medios y con los antecedentes que he indicado, pido a los señores senadores que piensen que esta misma influencia hoy, mañana y pasado se ha de ejercer en las mismas provincias que ellos representan; que piensen más: que éstos son los intereses de la patria y no los intereses de hoy, sino los intereses de siempre.

Debemos encerrar al gobierno general, debemos encerrarnos nosotros mismos, parte de aquel gobierno, en los límites estrictos de nuestras atribuciones, dejando que cada uno de los estados federales se desenvuelva y ejerceite sus atribuciones dentro del propio límite también de su poder, con sus errores y extravíos, si se quiere, pero con la independencia que la Constitución les consagra.

Esa es la base de nuestro sistema de gobierno: no sólo el sistema representativo, no sólo

las instituciones de gobierno libre se están viciando, sino que se está viciando el mismo sistema federal que para constituirse, le ha costado al país cincuenta años de guerras cruentas.

El sistema federal que nos hemos dado, con arreglo a nuestra Constitución, está en peligro; se encuentra precisamente en este momento en un punto tal, que, si se inclina un poco más la balanza, quedará el nombre, pero no la existencia de este sistema. Hemos llegado al máximo de poder que constitucionalmente podemos acordarle al gobierno de la Nación: no hay como antes he dicho, poder alguno que pueda contrapesar su acción. No le demos, pues, ningún poder que no sea el de la Constitución, porque, si al poder constitucional reúne el que no está en la Constitución, desaparece el gobierno federal, vamos a un gobierno unitario disfrazado, a un gobierno unitario vestido con el ropaje de gobierno federal que puede muy bien no ser y no llamarse un gobierno unitario, sino un despotismo civilizado.

Yo pido, señor presidente, a mis honorables colegas que mediten bien en la transcendencia de esta cuestión, que puede aparecer en su forma insignificante, pero que encierra y compromete los más grandes principios de nuestro gobierno.

**Sr. Igarzábal.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Si a la Cámara le parece, podríamos pasar a un cuarto intermedio, quedando con la palabra el señor senador por San Juan.

—Asentimiento.

—La Cámara pasa a cuarto intermedio, continuando pocos momentos después la sesión.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

**Sr. Igarzábal.** — Señor presidente: después del entusiasmo y calor con que se ha expresado el honorable señor senador por Buenos Aires, después que ese entusiasmo ha sacado la cuestión que se trata de su verdadero terreno, llevándola al de la política militante, después que la elocuencia del señor senador indudablemente debe haber conmovido los ánimos de mis honorables colegas como ha conmovido el mío propio y preparado a todos para oír palabras de entusiasmo también, se comprenderá, señor presidente, cuán difícil es mi tarea de colocar esta cuestión en su verdadero terreno y de entresacar del brillante discurso del señor senador por Buenos Aires lo que hace

a la cuestión, es decir, sus argumentos con relación al derecho constitucional y a las conveniencias que hay en que la Nación en la sanción de la ley que recomienda la mayoría de la Comisión de Negocios Constitucionales. Entresacar he dicho, señor presidente, y desde luego anuncio a la Cámara que no he de hacer otra cosa; sí, entresacar, porque el señor senador ha ocupado una gran parte de su discurso con cuestiones que son de todo punto ajenas al asunto que se debate, con suposiciones respecto a la política del presidente de la República y respecto a la situación de varias provincias con relación a las opiniones del presidente. Digo, señor presidente, que debo entresacar, lo que equivale a decir que debo prescindir de todas estas cuestiones, porque considero que los actos del presidente de la República no están en este momento en tela de juicio: considero que ha sido mal elegido el momento para discutir si el actual presidente de la República infringe o no la Constitución.

Los señores senadores, señor presidente, conocen perfectamente bien los actos del presidente de la República en la forma que ha podido juzgarlos el señor senador por Buenos Aires, atribuyéndoles esta o aquellas intenciones.

Cuando estos actos han podido producirse, si es que se han producido, el señor senador por Buenos Aires no ha podido ignorar cuál era la situación en que se encontraba un miembro del Congreso que considerara criticables tales o cuales actos del Poder Ejecutivo para pedirles cuenta de la conducta del presidente, si esa conducta era mala.

¿Qué significa, pues, un proceso hecho en momentos en que no está en tela de juicio esa conducta del presidente, en momentos en que él no puede defenderse, porque no se discuten sus actos?

Es propio, pues, traer esta cuestión que está en debate a su verdadero terreno, porque ella no se relaciona en lo más mínimo con los actos y con la política del presidente de la República; y, por consiguiente, la Cámara no va a oír de mí, sino la dilucidación de las diferentes cuestiones de derecho constitucional que ha expuesto el señor senador, anunciando desde luego que he de seguirlo también en el terreno que él se ha colocado respecto a la interpretación que los Estados Unidos hacen de artículos que el señor senador ya ha recordado perfectamente bien que son iguales a los de nuestra Constitución y que se relacionan con la cuestión que se debate, porque han

Septiembre 20 de 1883

CAMARA DE SENADORES

51ª Reunión. 49ª Sesión ordinaria

de servir, señor presidente, para justificar el consejo que la mayoría de la Comisión de Negocios Constitucionales da a la Cámara pidiéndole la sanción del proyecto en discusión.

La parte constitucional del discurso del señor senador me parece que ha comprendido dos puntos principales.

El ha dicho: la Legislatura de Corrientes no ha tenido facultad alguna para hacer esta cesión; y agregaba que había buscado minuciosamente, examinado con escrupulosidad la Constitución de aquella provincia y no había encontrado en ninguno de sus artículos cláusula alguna que permitiera a aquella Legislatura hacer la cesión de que se trata. En seguida examinaba la Constitución nacional, y decía: no encuentro tampoco ningún artículo en virtud del cual el Congreso pueda aceptar esta cesión.

La Cámara me va a permitir que por su orden trate estas dos cuestiones que son indudablemente las más fundamentales de las que ha expuesto el señor senador por Buenos Aires.

La Constitución nacional, señor presidente, no sólo establece el gobierno general para la administración de la Nación y las bases para la organización de los gobiernos de las provincias, sino que también da las reglas fundamentales a las cuales se han de someter las relaciones del gobierno nacional con los gobiernos de provincia.

No puede ser de otra manera: si la Constitución nacional hubiera olvidado lo concerniente a esas relaciones, indudablemente que habría dejado al débil — a las provincias — a merced del fuerte, la Nación.

En la Constitución nacional, es, pues, donde el señor senador va a encontrar las cláusulas que rigen el acto de la Legislatura de Corrientes.

No es necesario, señor presidente, que la facultad de una Legislatura esté expresamente consignada en la Constitución provincial para que esa facultad exista, cuando ella se relaciona con actos en que tiene intervención el interés nacional. Así vemos que la Constitución nacional se ocupa en diferentes artículos de las facultades de las legislaturas. El artículo 3º, recordado por el señor senador, el artículo 13, el 29, privándole a las legislaturas de las facultades extraordinarias; el artículo 41, ordenándoles lo relativo a la elección de diputados al Congreso, el 46, etcétera.

En todos estos artículos encontrará el señor senador, expresamente consignadas en la Constitución las facultades que se confieren a las legislaturas de provincia.

Encontrará otros artículos el señor senador, como el 6º, el 107 y el 108, en los cuales la Constitución se refiere a los gobiernos de provincia, a las autoridades constituidas, y no me dirá el señor senador que para el ejercicio de las atribuciones o facultades que la Constitución en esos artículos atribuye a las provincias, se ha de necesitar que éstas convoquen una convención para que esta convención trate de esas facultades expresas en la Constitución.

Por ejemplo, yo pregunto: aunque no esté en la Constitución provincial que la Legislatura de Corrientes puede hacer tratados con las provincias del interior para los fines de la administración de justicia, estando en la Constitución nacional, ¿habrá quien niegue que la Legislatura de Corrientes tiene esta facultad? Me parece que no, señor presidente.

La Constitución nacional en el artículo 6º dice, que las autoridades constituidas de las provincias han de pedir la intervención; no dice que ha de ser la Legislatura. ¿Habrá quien sostenga que es necesario que reúna una convención para que la intervención se haga efectiva por la decisión del pueblo?

De ninguna manera, porque la Constitución no ha nombrado a la Legislatura; se ha referido a las autoridades locales y ha querido referirse a los gobernadores, o a las legislaturas, según el caso y según la materia de que se trata.

De ninguna manera ha querido la Constitución que las provincias en sus relaciones ordinarias, y con objetos puramente ordinarios, han de convocar una convención para que dé expresamente facultades a la Legislatura o al gobernador, con motivo de sus relaciones con el gobierno nacional.

Así, pues, señor presidente, no hay necesidad de confundirse por no encontrar en la Constitución de Corrientes facultades para que la Legislatura pueda hacer la cesión de que se trata.

¿Qué importaría, señor, que la Constitución de Corrientes, no solamente no dijera nada, sino que consignase la prohibición a la Legislatura de enajenar parte de su territorio? No importaría nada.

La Legislatura de Corrientes estaría siempre en el terreno constitucional, haciendo esa cesión, porque por el artículo 31 de la Constitución nacional, las leyes y las constituciones provinciales que se opongan a lo que prescribe la Constitución nacional, tendrán que conformarse a ésta. De manera que las reglas que sirven para los actos en que interviene el go-

bierno nacional y los gobiernos provinciales, no se deben buscar de ninguna manera en las constituciones provinciales; deben buscarse en la Constitución nacional, por las razones que he expresado antes.

**Sr. Ortiz.** — En ninguna de las dos está.

**Sr. Igarzábal.** — Eso es lo que vamos a ver.

En ninguna de las dos está, dice el señor senador, y me extraña, porque el artículo 13 de la Constitución nacional, que debe ser conocido por todos los miembros del Congreso, que el señor senador por Buenos Aires había citado, pero dándole una interpretación enteramente restrictiva, que es de todo punto inaceptable, a estar a los principios de nuestro derecho constitucional, el artículo 13, decía, resuelve la cuestión.

Por ese artículo, señor presidente, las legislaturas de las provincias respectivas pueden dar su consentimiento para que parte de esas provincias se reúna con parte de otra para ser erigido un Estado. Si tal cosa puede hacer una Legislatura, quien puede hacer lo más, puede hacer lo menos; luego, puede la Legislatura de Corrientes ceder el pueblo de Posadas para que sea la capital del territorio nacional de Misiones que debe ser, en el menos tiempo posible, una nueva provincia de la Nación.

Esta es la cuestión, porque es preciso tener presente que revisando toda nuestra Constitución en lo que se relaciona con esta cuestión, encontraremos esto, que es fundamental: la situación y el gobierno de los territorios nacionales, es enteramente transitoria; allí habitan ciudadanos argentinos, allí existe una población que no existía cuando se inaugura el gobierno en el territorio, y debe existir más tarde o más temprano, si la Nación fomenta la colonización.

Pero la Nación no quiere colonias, la Constitución de la República quiere provincias, quiere estados incorporados a la Unión.

De manera, pues, señor presidente, que todo lo que conduzca a que cuanto antes un territorio nacional salga de este estado provisional en que se encuentra, cuando se llama territorio, conduce, señor presidente, a la formación de ese territorio, o a su erección en provincia, y todo lo que conduzca a ello, está en las facultades de las legislaturas, está comprendido en el artículo 13 de nuestra Constitución.

El señor senador por Buenos Aires, recordaba a Estados Unidos. Si los artículos son análogos, es regla de nuestro derecho constitucional, y es consejo del Congreso Constituyente que sancionó la Constitución, que cuando

existen artículos análogos en la Constitución argentina a la de Estados Unidos, debemos interpretarlos, como Estados Unidos interpretan instituciones análogas.

Bien, señor, no crea la Cámara que me voy a referir a esa infinidad de Estados que se han formado en la Unión Americana, por cesiones hechas por otros Estados para que se erija inmediatamente otro Estado nuevo en la Unión. Ejemplos como este que acabo de indicar podría presentar, tal vez, dieciocho o veinte; pero no se trata de eso, porque no se trata de la cesión de Posadas para hacerla inmediatamente provincia de la Nación; se trata de la cesión de un territorio más o menos poblado, y sobre esto, he de tener ocasión de recordar lo que el señor senador por Buenos Aires ha dicho antes, que en ningún caso debían hacerse cesiones de territorios poblados, que debían ser territorio nacional, para hacer Estados inmediatamente.

En este caso se encuentran los Estados siguientes de la Unión Americana: Tennessee, que fué erigido en Estado por ley de 1º de Junio de 1796, del territorio cedido por Carolina del Norte, en 1789.

**Sr. Baibiene.** — Territorio casi enteramente desierto.

**Sr. Igarzábal.** — No, señor; no se trata de territorios enteramente desiertos; he de demostrar también eso al señor senador.

Recuerdo sin ir más lejos, la cesión hecha por Maryland y Virginia del territorio poblado para aumento de la capital de la Nación.

**Sr. Baibiene.** — Cosa enteramente distinta.

**Sr. Igarzábal.** — El estado de Ohio fué erigido por ley de 19 de Febrero de 1813, del territorio cedido por Georgia en 1787, muchos años antes.

Para no entrar en más detalles, voy a mencionar los Estados que se encuentran en el mismo caso. Indiana que se erigió en Estado por ley de 11 de Diciembre de 1816, del territorio cedido por Virginia a Estados Unidos; Mississippi, erigido por ley de 1817, en Diciembre, del territorio cedido por Georgia y Carolina del Sur, con mucha anticipación. Y aquí repito que no se trata de cesiones que se hayan hecho para erigir, en el territorio cedido inmediatamente un Estado, se trata de cesiones de territorios que el gobierno de Estados Unidos ha administrado por algunos años, hasta que han tenido la importancia necesaria para ser erigidos en Estados.

El Estado de Illinois fué hecho Estado por ley de 3 de Diciembre de 1818, del territorio que había cedido a la Unión el Estado de Vir-

ginia. Alabama, fué erigida en Estado por ley de 14 de Diciembre de 1819, del territorio cedido con mucha anticipación por Georgia y Carolina del Sur. Michigan, fué erigido por ley de 15 de Junio de 1816, del territorio anteriormente cedido por Virginia. Minnesota se hizo Estado en 1858, del territorio que había sido cedido por Luisiana en 1849.

**Sr. Avellaneda.** — ¿En qué fecha?

**Sr. Igarzábal.** — En 1849, se hizo Estado en 1858.

**Sr. Baibiene.** — Después de dominados los indios.

**Sr. Igarzábal.** — Después de poblado el territorio, porque no se trata de territorios desiertos.

**Sr. Baibiene.** — Poblados por los indios.

**Sr. Igarzábal.** — Se trata de territorios que tenían derechos políticos.

**Sr. del Valle.** — Despoblados durante la étno-federación.

**Sr. Baibiene.** — Generalmente poblados por indios.

**Sr. Igarzábal.** — Repito que eran territorios poblados.

**Sr. del Valle.** — Eran desiertos.

**Sr. Igarzábal.** — Sostengo que eran poblados; y si la Cámara pasara a un cuarto intermedio, traería las pruebas de que, en las citas que estoy haciendo, no hay ningún territorio que haya sido erigido inmediatamente en Estado después de la cesión.

**Sr. del Valle.** — ¿De dónde toma las citas? ¿tendría la bondad de decírmelo el señor senador?

**Sr. Igarzábal.** — En Story encontrará algunos antecedentes.

**Sr. del Valle.** — ¿Del texto inglés?

**Sr. Igarzábal.** — Del traducido por Calvo.

**Sr. del Valle.** — Ya lo hemos pedido.

**Sr. Igarzábal.** — El estado de Oregón, señor presidente, fué erigido en 1859, y después de la crección del Estado todavía se segregó como una tercera parte de su territorio, para agregarlo al Estado Federal de Washington. Es un caso casi exactamente igual al de que se trata actualmente. Y bien, señor, la Cámara ve cómo se ha interpretado en Estados Unidos el artículo constitucional, exactamente igual al décimotercero de nuestra Constitución.

El señor senador por Buenos Aires, da mucha importancia a la cuestión de que los territorios tengan o no tengan población. El caso de la cesión de Maryland y de Virginia, ¿puede negarlo el señor senador? Cuando Virginia cedió el territorio de Estados Unidos, ¿no lo cedió con población?

**Sr. del Valle.** — Con indios; los llamados territorios desiertos por el mismo Story, a quien el señor senador cita de antemano y estoy seguro de que Story no dice nada de lo que dice el señor senador, puede ser que el anotador.

**Sr. Igarzábal.** — El anotador.

**Sr. del Valle.** — No es Story, será el señor Calvo.

**Sr. Igarzábal.** — El anotador de Story se refiere, citando página por página, los documentos de Estados Unidos.

**Sr. del Valle.** — No recuso la autoridad del anotador, pero lo que digo es que no es Story.

**Sr. Igarzábal.** — Es probado, señor senador, que el condado que Virginia cedió a Estados Unidos fué el condado de Alejandría; y este condado, señor, y lo dice Story en su texto, pasó con todas sus leyes, con todo lo que constituía su gobierno, a Estados Unidos, y el Congreso cuando estableció su jurisdicción en el territorio cedido, conservó en cuanto posible fué — y me valgo en esto, creo, de las mismas palabras de Story — esas leyes y esas disposiciones que habían regido antes la población del Estado de Alejandría.

¿Perdieron los habitantes de Alejandría, señor, sus derechos políticos? Evidentemente, porque en los Estados Unidos, el territorio que sirve de asiento al gobierno federal no tiene derechos políticos; pero en Story puede ver el señor senador lo que se dice sobre el particular. ¿Qué importa, dice Story, que perdiera la jurisdicción del gobierno del Estado si iba a tener la jurisdicción del Congreso? ¿Acaso el Congreso podrá ofrecerles menos garantías que las que podían ofrecerle la Legislatura del Estado?

**Sr. Baibiene.** — Mucho más que lo que puede ofrecerle un jefe de frontera.

**Sr. Igarzábal.** — No sé, señor; eso no es la cuestión que discutimos.

**Sr. Baibiene.** — Esa es la cuestión.

**Sr. Igarzábal.** — Lo que tratamos es, señor, de una Legislatura de provincia; si la Legislatura de Virginia ofrecía a los habitantes de Maryland más garantías que las que podría ofrecerle el Congreso de Estados Unidos. De lo que se trataba entonces es, señor, de la pérdida de esos derechos políticos por parte de ese gobierno, que no estaba compensada, como lo dice Story perfectamente, bien, porque estoy hablando de territorios que fueron poblados y por eso hice esta referencia, no estaba compensada, decía, con el alto honor de ser asiento del gobierno de Estados Unidos y de participar...

**Sr. del Valle.** — Se refiere a la capital.

**Sr. Igarzábal.** — No desearía ser interrumpido.

**Sr. del Valle.** — Muy bien, señor senador, respetaré su deseo.

**Sr. Igarzábal.** — Ahora, ¿dónde está, señor, la facultad del Congreso para aceptar esta cesión? Existe en el artículo 13 que reclama el consentimiento del Congreso; por consiguiente le da la autorización para aceptar cesiones que conduzcan a la formación de nuevas provincias de la República. Indudablemente el Congreso tiene esta facultad. Si el Congreso por el artículo 67, inciso 14 de la Constitución tiene la facultad de aceptar todas las cesiones que conduzcan a la formación de esos Estados. Es clara, señor presidente, que, si como el señor senador dice, se trata de territorios despoblados, es claro que el Congreso no puede aceptar esa cesión para inmediatamente erigirlos en Estado, porque no puede ser erigido en Estado un territorio desierto.

**Sr. del Valle.** — ¡Si no es cesión a la Nación cuando se forman Estados!

**Sr. Igarzábal.** — Hay cesión, Estado, y lo que sostengo es que cuando el Congreso tiene facultad de crear nuevas provincias, tiene facultad de aceptar todo lo que conduzca a formarlas, y diré más, todo lo que conduzca a formarlas lo más pronto posible, porque, como he dicho, la situación de nuestros territorios nacionales es transitoria; la situación es inaceptable, por que la República Argentina no puede ni debe tener, por su Constitución, simples colonias; debe tener provincias, y nada más. En la facultad de crear provincias, es donde encontrará el señor senador la facultad del Congreso para aceptar esta cesión; pero la encontrará en otra parte también; la encontrará en ese artículo 67, inciso 27, donde el señor senador ha creído que podría caber apenas, y sobre el cual dijo que sería el artículo más pertinente a la cuestión, porque podría caber en ese artículo la cesión de que se trata; allí encontrará la facultad del Congreso el señor senador.

Ese artículo dice: «que el Congreso ha de ejercer legislación exclusiva en todo el territorio de la capital de la Nación y sobre los demás lugares adquiridos por compra o cesión en cualquiera de las provincias». ¿Cesión por quién? Cesión de las provincias. ¿Hecha por quién? Por quien puede hacerla en las provincias: la Legislatura. Esta cesión, según la Constitución nacional no por constituciones provinciales porque no se trata de actos puramente de las provincias, sino de actos con la relación a la Nación es hecha por las legislaturas de

provincias, ¿para qué objeto? Para fortalezas, arsenales, almacenes y otros establecimientos de utilidad nacional. Y aquí me encuentro con el señor senador, que pretende que establecimientos de utilidad nacional en nuestra constitución significa un arsenal cuando está montado, un astillero cuando está funcionando o fortaleza...

**Sr. del Valle.** — Todo significa, un muelle, por ejemplo.

**Sr. Igarzábal.** — Pero, señor, para eso no se necesita jurisdicción nacional. En la provincia de Buenos Aires hay astillero donde se construirán los buques de la Nación; nadie ha pedido por eso jurisdicción exclusiva. Nadie ha pensado en pedir a la provincia de Buenos Aires jurisdicción exclusiva sobre el arsenal. En el puerto de Rosario existen almacenes, y nadie ha creído que el gobierno nacional debía pedir permiso a la provincia de Santa Fe para tener jurisdicción sobre el territorio que ocupan estos almacenes. ¿Por qué? Porque para eso no se necesita. Y aquí le llevo al señor senador a los tratadistas americanos que hacen notar que en Estados Unidos, cuando se trata de cesiones de territorios, va ligada la cesión a la jurisdicción del territorio, es decir, de Estados Unidos. La adquisición de un territorio para establecer un arsenal, un muelle o un almacén, no trae necesariamente aparejada la jurisdicción del gobierno nacional. No, señor. Lo que trae jurisdicción es lo que está enteramente ligado con la jurisdicción, es la cesión del territorio. Por consiguiente, señor, cuando la Constitución argentina en este inciso habla de establecimientos de utilidad nacional, se trata de territorios que puedan servir para el asiento de autoridades nacionales. ¿Para qué? Para los fines de la Constitución. ¿Para qué? para la erección de Estados que es lo que se propone la Constitución en los artículos que he citado. ¿Puede negarse, señor presidente, que no es de utilidad nacional lo que conduce a la formación de la futura provincia de Misiones? Qué, ¿no es de utilidad nacional? que la autoridad de ese territorio se establezca en una ciudad en que encontrará base para el gobierno de aquellos territorios, de donde podría impulsarlo con mayores ventajas. No puede negarse que sea de utilidad nacional. Por consiguiente, en este artículo diré que el mismo señor senador ha encontrado lo necesario para que esta ley pase.

**Sr. del Valle.** — Diga el señor senador por su cuenta lo que quiera; pero no por la mía.

**Sr. Igarzábal.** — El señor senador, sobre el punto de la utilidad, pretendía, me parece, ha-



Septiembre 20 de 1883

CAMARA DE SENADORES

51ª Reunión. 40ª Sesión ordinaria

cer una caricatura de las observaciones que había hecho yo en mi informe. El señor senador decía: ¿por cuestiones de un camino ha de hacerse esta sesión, ha de sacrificarse a la provincia de Corrientes? ¿No puede encontrar la Nación lo que necesita, en Corpus, que está en la costa del Paraná, para que de allí se gobierne la costa del Uruguay? Y a renglón seguido, el mismo señor senador nos decía: La capital no debe estar en la costa del Paraná; debe estar en el del Uruguay, y sin embargo quiere el camino para que de Corpus se gobierne el Uruguay.

**Sr. del Valle.** — Para eso no.

**Sr. Igarzábal.** — La utilidad está demostrada, se ha dicho: desde Posadas puede administrarse fácilmente todo el territorio de Misiones, porque Posadas queda, aunque en la costa del Paraná, frente a una parte de la costa del Uruguay, hacia la cual conducen los caminos carreteros. La administración de Posadas es fácil, facilísima. Es desde este punto que el gobierno de Corrientes administraba el territorio de Misiones, mostrando con esto sólo, que es un camino fácil, natural para el desenvolvimiento de aquellos territorios. Creo, señor presidente, que con estas observaciones he contestado la parte constitucional del discurso del señor senador.

Sin embargo, si en el curso de la discusión se hicieran sobre este punto algunas observaciones, me haré un deber de usar de la palabra.

**Sr. Baibiene.** — Yo tengo necesidad de manifestar mi opinión en esta cuestión; pero es tarde, y algunos señores senadores ya se han ausentado, y así haría moción, si el señor ministro del interior no nos quiere privar de su presencia, haría moción, digo, para que se levantara la sesión, para continuar tratando este asunto en la próxima.

—Apoyado.

**Sr. Cambaceres.** — Necesita cinco votos de apoyo la moción del señor senador por Corrientes para que, según el reglamento, pueda ponerse en discusión.

**Sr. Presidente.** — Sírvanse ponerse de pie los señores senadores que apoyan la moción.

**Sr. Secretario.** — Está suficientemente apoyada.

—Se vota si se levanta la sesión y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Debo prevenir a la Cámara que se han recibido dos pliegos del Poder Ejecutivo que deben ser abiertos en sesión secreta, la que tendrá lugar el sábado a primera hora.

—En seguida se levanta la sesión, siendo las 6 y 15 de la tarde.